

Memoria y violencia en Colombia.

Algunos comentarios

Rodolfo Torregrosa J.
Colombia

La historia de Colombia ha sido una sucesión de pequeñas y grandes manifestaciones de violencia. Desde las guerras de independencia, pasando por las guerras del siglo XIX, y por una innumerable cantidad de alzamientos, revoluciones y montoneras menores, hasta llegar al punto álgido de la violencia como institucionalidad paralela: la muerte de Gaitán, el Bogotazo y los años de la Violencia. Pensar que los orígenes de tales manifestaciones de «la política por otros medios» fuesen el resultado de las mismas causas, consecuencias de los mismos procesos o, al menos, gritos comunes ante privaciones similares, sería bastante simplista. Pues, mientras el país se mueve, y cambia su realidad, la violencia permanece perenne. Sobrevive la violencia en sus odios y en sus fantasmas, en los vencidos y en los vencedores. La guerra, y toda apelación a la violencia, quedaban como una ocupación contingente pero común. Ni siquiera las generaciones de colombianos que han vivido en paz se han librado de su espectro: ya que “En nuestra historia nacional los odios heredados sirvieron durante mucho tiempo, de detonante de nuestras guerras” (Sánchez, 2003).

En nuestro país, el culto a la memoria es mucho más ambiguo puesto que puede cumplir diferentes funciones. Para Sánchez (2003), la relación memoria y olvido está condicionada con los otros acontecimientos de las estructuras sociales y de poder del presente, es decir de lo que merezca ser olvidado, para vivir sanamente el presente y transformar el futuro.

Así, para el autor, debe haber una reapropiación del pasado que sirva para cambiar la forma de crear identidades. Que no sea el relato de la guerra, el que sirva para eso. Se deben construir escenarios donde se puedan debatir las diferencias sobre la construcción de la identidad nacional. La pregunta es ¿cómo construir estos escenarios para ventilar los diferentes proyectos de país?

Según Sánchez (2003), La guerra es una de las muchas manifestaciones de la crisis de la sociedad colombiana. Las relaciones guerra, memoria e historia son muy complejas debido a los procesos de construcción de identidad, de pluralidad de relatos y a las huellas de los lugares de memoria.

De este modo, la trayectoria de nuestro país ha transcurrido bajo el signo de la violencia. Una violencia percibida a menudo como repetición, pero que de hecho ha significado una invasión progresiva de más y más espacios de la esfera pública y privada. Y en una época marcada por la globalización tiene desde luego efectos internacionales muy distintos a los de la Violencia de los años cincuenta.

El rasgo característico de la esfera política colombiana desde por lo menos la década del ochenta es esa multiplicidad de violencias (por sus orígenes, objetivos, modus operandi) que hace que en los mismos escenarios se puedan encontrar, diferenciados pero también muchas veces entrelazados, el crimen organizado, la lucha guerrillera, los paramilitares, la guerra sucia y la violencia social difusa. Se trata desde luego de una multiplicidad sobredeterminada o atravesada por la economía y las organizaciones comerciales y criminales del narcotráfico en los ámbitos regional e internacional.

Asistimos, en efecto, a una explosión de violencias, a la cual se suma, desde luego, la heterogeneidad de sus contenidos regionales. Así mismo, la violencia ha dejado igualmente de ser un fenómeno exclusivamente rural. Sus caras urbanas son también muy variadas: impacto del narcoterrorismo, y del sicariato como brazo armado de una especie de «industria de la muerte» en ciudades como Medellín; implantación de la

guerrilla en comunidades barriales de capitales, como la propia Bogotá.

Adicional a lo anterior, diferencia de ciclos, diversidades regionales, multiplicidad de actores y de escenarios, es la constatación más visible del Informe-diagnóstico^[1] presentado por un grupo de académicos al gobierno del Presidente Virgilio Barco. El texto, conocido como el informe de los “violentólogos” tuvo una amplia recepción académica y en los círculos de asesores y consejeros de las administraciones de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994).

El informe fue útil en señalar la diversidad y la fragmentación en la perspectiva de análisis, trayendo como consecuencia, la pérdida de una visión holística de la violencia; adicionalmente, señala la contundente demostración de la heterogeneidad de la violencia. Además, el informe resalta que en la construcción de la compleja pirámide de violencias parecía hacer falta un orden jerárquico o de prioridades, aunque no necesariamente la búsqueda de una matriz de la cual todas las demás modalidades fueran simples epifenómenos.

De otro lado, el estallido de la violencia que ocurre en Colombia desde hace décadas, transforma la rutina de la muerte en algo normal para cualquier ciudadano de nuestro país y convierte en un hecho rutinario el que el asesinato sea el mayor factor de muerte de la juventud, y que en el último año desaparezca una población similar a la que murió en el conflicto de Bosnia durante toda su existencia. Esa violencia hace también, que nuestra propia concepción colectiva sobre la paz se distorsione.

La población y las élites dirigentes del país han construido una imagen mítica de lo que significa la paz en Colombia. En ese imaginario colectivo afectado por una permanente y profunda violencia, aparece la idea y el deseo de la paz como la construcción de una sociedad idílica, apaciguada, sin problemas, sin ningún tipo de conflicto. Al conflicto social y político, exacerbado por el uso de las armas, se le opone una visión de la negación del conflicto que nada tiene que ver con la realidad del mundo y la esencia misma de las sociedades.

La paz en Colombia es el encuentro de las diferencias que se mantienen, es el encuentro de los instrumentos que permiten resolver los conflictos, o mantener, o agudizar los conflictos sociales, pero de manera no violenta, o por lo menos de una violencia que no implique el exterminio del contrincante. La paz en sí misma es un conflicto y crea más conflictos pero no intermediados por las armas y la muerte.

Ninguna guerra es eterna, todas finalmente se tramitan o a través de la victoria militar, o a través del pacto concertado; las victorias militares a veces simplemente lo único que hacen es engendrar de nuevo el conflicto armado, aplazado solo por algún tiempo, los pactos permiten resoluciones más sólidas y permanentes en sociedades que deciden abordar otros caminos, darle cara a nuevos conflictos más fructíferos para el desarrollo humano.

Una sociedad como la nuestra, cuyas elites dirigentes originales se apropiaron de antemano de todas las formas originarias del poder público y se dedicaron a construir un sistema, un estado y una economía cerrados, excluyentes para su propio pueblo; tenía que generar no sólo desigualdad social y política, sino además una multiplicidad de conflictos que terminaron por desarrollarse violentamente a través de la muerte y de la ilegalidad (Sánchez, 2003).

En Colombia esta apropiación privada y temprana de un estado aún por construir no permitió el surgimiento de un verdadero poder público, de una conciencia exacta de lo público, de lo de todos, en esferas así fuese pequeñas de la sociedad y de la economía. A diferencia de los procesos europeos, las fuerzas sociales no actuaron durante buena parte de la historia nacional sino que fueron objeto de la construcción de una nación que no los incluía, en donde sus intereses ni su palabra ni su pensamiento contaban.

Una nación moldeada “desde arriba” y “desde afuera”, modernizada a la fuerza, sin el

consentimiento de sus gentes, sin la apropiación social de esa modernización, no podía construir una concepción colectiva de "lo público", del manejo colectivo y concertado de las decisiones fundamentales, del ejercicio permanente del pacto como instrumento privilegiado para la resolución del conflicto.

De tal manera que Colombia no construyó un verdadero estado, como poder público, ni los esbozos de un pacto que la unificara como nación. Sólo poderes privatizados en conflicto que fueron, sobre la base de la exclusión, construyendo una cultura de la intolerancia y de la violencia.

Los excluidos construyeron por fuera del Estado, de su legalidad y de sus instituciones, su propio espacio, y lo hicieron en medio de la violencia y del fuego. Resolver pacíficamente muchos de los actuales conflictos, implica solucionar en términos reales el problema de la exclusión de la mayor parte del pueblo colombiano, de su Estado y de su economía. La democracia es la receta; la negociación de la paz es la negociación del fin de las exclusiones.

La política de negociar en medio del conflicto tiene su origen en los distintos gobiernos de los últimos 20 años. Belisario Betancurt da el primer paso para comenzar a dialogar en el municipio de Dolores, Tolima. Poco tiempo después el presidente Betancurt promete despejar los municipios de Vistahermosa y Mesetas en el departamento del Meta. Posteriormente, se firman los Acuerdos de La Uribe que se extienden durante el gobierno de Virgilio Barco.

El ataque a Casa Verde, el 9 de Diciembre de 1990, luego de 7 años de estar realizando esfuerzos por la reconciliación nacional, sin previamente dar por terminados los acuerdos firmados con los dos gobiernos anteriores, unido a la política de guerra integral, declarada por el gobierno de Cesar Gaviria contra la insurgencia, significó un nuevo momento en la historia del conflicto.

Posterior a este ataque, las conversaciones entre el gobierno de Gaviria y la insurgencia, debieron realizarse en el exterior, en sus rondas de Caracas y Tlaxcala. Así, Después de 40 años de guerra y 20 de oscilaciones entre la guerra integral y los procesos de paz, el balance muestra que la paz negociada es el único camino que puede ofrecerle alternativas de futuro democrático, justo y digno a la sociedad colombiana.

Esto supone el rechazo a la perspectiva de una paz de vencedores y vencidos en el terreno de la guerra, el respeto al derecho de la sociedad de no involucrarse en el uso de las armas, el compromiso con criterios de diálogo en toda circunstancia y la comprensión del postconflicto como gestión desarmada de los conflictos sociales.

Construcción democrática de la paz a partir de la profundización de procesos de negociación y el desarrollo de procesos de participación ampliada de la sociedad en la construcción de la paz política y social.

Paz democrática igualmente en la perspectiva de que pueda conducir a establecer una sociedad democrática en todas las dimensiones de la vida nacional. Alfredo Molano ha sintetizado esta aspiración al señalar que la paz negociada no sólo es posible sino deseable porque únicamente una paz sin vencedores y vencidos puede crear las bases sólidas de un nuevo orden político fundado en la coexistencia democrática y pluralista.

Paz integral que contribuya a la realización de transformaciones estructurales en el Estado, el régimen político, la economía y el orden social y cultural, tradicionalmente fundados en la exclusión, la inequidad, la impunidad y la corrupción.

Muchos diagnósticos de la crisis colombiana señalan la precariedad del Estado como uno de los ejes críticos, pero donde no hay coincidencia es en las consecuencias que se derivan de esta hipótesis, e incluso se han convertido en un argumento para justificar el autoritarismo y las razones de Estado.

Desde una perspectiva democrática, el problema radica en reconocer que dada la profundidad histórica y social del conflicto, la única manera viable y deseable de

reconstrucción de la institucionalidad es la construcción de nuevos acuerdos o consensos nacionales en relación con los problemas ya identificados en las agendas de paz.

De este modo, es un error pensar que el desarme de los actuales factores de violencia política acabará de inmediato la violencia en Colombia. Lo que permite ese desarme, y el proceso de democratización que conlleva, es permitir el encuentro de instrumentos no armados para dirimir conflictos, sólo así, comenzará un proceso de desvertebramiento paulatino de la cultura de la violencia que impregna todos los poros y los actores de la sociedad, un proceso que durará lustros, como la formación o deformación de toda cultura, y que debe posibilitar, con la insistencia de todos los voceros de la paz, la conformación de una cultura de la tolerancia, de la interlocución no violenta del conflicto; una cultura de la paz y de la democracia.

Nuestra conflictividad social, por no ser manejada acertadamente, en lugar de ser la fuente y el motor de un desarrollo progresivo de nuestra nación, se transformó en involución, en carrera apresurada hacia la destrucción y la desintegración del tejido mismo de la sociedad; es más, el furor mismo de la violencia, su dinámica intrínseca, descompuso progresivamente todos los factores y fuerzas que en ella intervinieron. La insurgencia, el narcotráfico, las fuerzas del Estado, los partidos políticos, las milicias, los cuerpos armados de los dueños de la riqueza poco a poco perdieron sus nortes originales y convirtieron el ejercicio de la violencia en un objetivo per se. Se trata de la conformación de una cultura de la violencia, fundamento casi exclusivo de las relaciones de poder en el país. Los medios se transformaron en fines en sí mismos; la guerrilla, las armas, dejaron de ser instrumentos, utilizables o no, del cambio social y pasaron a ser el objetivo mismo de la acción política. El cambio social como objetivo último, al ser desplazado por sus instrumentos, se perdió en el horizonte de la mentalidad guerrillera.

Se requieren esfuerzos continuos de repolitización del conflicto, no sólo de parte de la sociedad civil, sino del propio gobierno, una de cuyas armas cotidianas de combate suele ser, paradójicamente y por la naturaleza misma de la confrontación, la deslegitimación. Y para ello no debe perderse de vista que en Colombia el tiempo marcha contra los intereses de una negociación global. La contradicción, entre la expansión territorial de la guerrilla y su pérdida de espacios políticos en algunas zonas; la desarticulación organizativa e ideológica de muchos frentes guerrilleros; e incluso las palpables muestras de bandolerización en otros, son signos perturbadores.

Aunque fuera de sus propias zonas (como sucedía también en las violencias pasadas) los grupos insurgentes recurren cada vez más frecuentemente a prácticas que contradicen su discurso, como las operaciones terroristas y las masacres contra las bases sociales de sus presuntos o reales adversarios, hacia adentro, en cambio, dentro de una especie de racionalización espacial del ejercicio de la violencia y así sea por lógica puramente defensiva y con métodos abiertamente autocráticos, tienen códigos que imponen severos límites a la delincuencia común, en tanto puede competir con sus aspiraciones de depositarios exclusivos de la fuerza.

En todo caso, se trata simplemente de reconocer la dinámica entre guerra y política, y aceptar que incluso la escalada militar puede caber dentro de una estrategia de negociación.

Pero aún en medio de condiciones normativas favorables hay dos elementos que seguirán dificultando la consolidación de la paz en Colombia: uno referente a los actores y el otro al contenido de los eventuales acuerdos.

En cuanto a lo primero habría que destacar que con la terminación de la Guerra Fría y el fracaso del llamado "socialismo real" marcado con la caída del muro de Berlín en 1989, con la consiguiente pérdida, o al menos reducción sustancial de los apoyos logísticos y doctrinarios internacionales, los actores armados entran en un rápido proceso de regionalización interna, y de fragmentación, no en el sentido cronológico, sino en el sentido de multiplicación de interlocutores eventuales.

Esta proliferación de actores ha hecho que en la situación presente, el proceso de paz sea mucho más complejo que en las guerras anteriores. Hoy no estamos frente a un

proceso entre dos actores enfrentados, sino frente a un conjunto de procesos simultáneos de guerra y eventualmente de paz; es decir, una “atomización del conflicto”.

En cuanto a lo segundo -la sustancia de la negociación y las consiguientes amnistías- vale la pena recordar que desde las guerras civiles del siglo pasado Colombia ha tenido una inigualable trayectoria. Y en la mayoría de las veces los acuerdos posbélicos han adoptado un contenido eminentemente político, cuya máxima expresión ha sido la expedición de una nueva Constitución.

Conclusiones

El problema de la violencia en Colombia no es reciente sino por el contrario tiene grandes raíces en la historia de nuestro pueblo y en el desarrollo que ha tenido la población a través del tiempo.

El escenario conflictivo de nuestro país presente diversos matices delictivos, los problemas no radican en un solo punto sino que existe variadas fuentes de discusiones en nuestro país, como son: la tenencia de la tierra, la pobreza, la tenencia del poder, la discriminación de la clase burguesa entre otras.

Frente a la terca permanencia de la eliminación del oponente como parte del conflicto, la memoria tiene algo que decir puesto que impide olvidar que el pasado habita todavía en el presente. Así mismo, el protagonismo de la memoria da cuenta de la existencia de conciencias distintas y encontradas.

No obstante en el horizonte de los procesos de paz en Colombia la memoria, y sus muchas implicaciones, brillan por su precariedad o ausencia. Aunque, la norma colombiana es más bien, la necesidad del olvido recurrente de las memorias subordinadas. Es así cómo, en nuestra historia se muestra que las negociaciones no han sido un arreglo entre iguales sino un acto de subordinación de los derrotados, en cuyo caso la paz se convierte, no en una oportunidad de reconducir el destino colectivo, sino en un simple acto de relegitimación del establecimiento, una vez más dotado de la capacidad de imponer a los derrotados la sumisión, y a sus causas el olvido.

El olvido de los perdedores y los determinantes propulsores del conflicto, en suma la mutilación de la memoria, moldea la trama donde se recicla la violencia contemporánea ante la que el Frente Nacional resultó sencillamente estéril.

La paz no es un hecho es un proceso. Para poder distinguir las salidas necesitamos distinguir las diferentes causas que generan la violencia, por tanto, se deben estudiar los factores reales de poder que protagonizan el conflicto.

Colombia necesita resolver el problema del narcotráfico como un factor que se articula de modo complejo a los intereses, las motivaciones y las prácticas de la guerra, tanto internas como externas; pero no puede disolver en este factor la comprensión de los problemas políticos y sociales de carácter estructural que explican el desarrollo histórico del conflicto social y armado. Las rentas de las economías ilícitas se han integrado a la economía política de la guerra y en tal sentido forman parte de sus motivos; pero la guerra es un fenómeno que se origina, se desarrolla y se resuelve como problema político.

En un momento en que Colombia se debate entre la construcción definitiva de la solución negociada de un conflicto de profundas raíces históricas y sociales y el desarrollo progresivo de dinámicas de guerra civil, esperamos que la cooperación internacional defina claramente su apoyo a la paz política negociada y su rechazo a las tentativas de las partes para escalar la guerra con recursos procedentes de la comunidad internacional. Las lógicas de apoyo unilateral contribuyen a la polarización y establecen responsabilidades directas e indirectas de la comunidad internacional en los efectos de la crisis humanitaria que producen.

Bibliografía

Arendt, Hannah, *La condición humana*, Barcelona, Ediciones Paidós, 1993.

Arendt, Hannah, *Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal*, Barcelona, Editorial Lumen, 1999.

Bell, Christine, *Peace agreements and human rights*, New York, Oxford University Press, 2000.

Broomhall, Bruce, *International justice and the International Criminal Court: Between sovereignty and the rule of law*, New York, Oxford University Press, 2003.

Cohen, Stanley, "State crimes of previous regimes: Knowledge, accountability, and the policing of the past", in *Law and Social Inquiry*, Vol. 20, No. 1, 1995.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala: Memoria del silencio*, 12 Vol., Guatemala, UNOPS, 1999.

Comisión de Estudios sobre la Violencia, *Colombia: violencia y democracia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1ra. Ed. 1987.

Douglas, Lawrence, *The memory of judgment: Making law and history in the trials of the Holocaust*, New Haven, Yale University Press, 2001.

Goldstone, Richard J., *For humanity: Reflections of a war crimes investigator*, New Haven, Yale University Press, 2000.

Gutman Roy y David Rieff, edit., *Crímenes de guerra: Lo que debemos saber*, Barcelona, Debate, 2003.

Hayner, Priscilla, *Unspeakable truths: Confronting state terror and atrocity*, New York, Routledge, 2001.

Hesse, Carla & Robert Post, edit., *Human rights in political transitions: Gettysburg to Bosnia*, New York, Zone Books, 1999.

Ignatieff, Michael, *El honor del guerrero: Guerra étnica y conciencia moderna*, Madrid, Taurus, 1999.

Jakobs, Günther y Manuel Cancio Melia, *Derecho penal del enemigo*, Madrid, Thomson Civitas, 2003.

Jaspers, Kart, *El problema de la culpa*, Barcelona, Ediciones Paidós, 1998.

Jelin, Elisabeth, *Los trabajos de la memoria*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2002.

Kertész, Imre, *Un instante de silencio en el paredón: El Holocausto como cultura*, Barcelona, Editorial Herder, 1999.

Lattimer, Mark, & Philippe Sand, edit., *Justice for crimes against humanity*, Oxford & Portland, Hart Publishing, 2003.

Levi, Primo, *Trilogía de Auschwitz [Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados]*, Barcelona, Muchnik Editores, 1985.

Margalit, Avishai, *Ética del recuerdo*, Barcelona, Editorial Herder, 2002.

Martínez de Murguía, Beatriz, *Descifrando cenizas: Persecución e indiferencia*, México, Ediciones Paidós, 2001.

Mate, Reyes, *Memoria de Auschwitz: Actualidad moral y política*, Madrid, Editorial Trotta, 2003.

Minow, Martha, *Between vengeance and forgiveness: Facing history after genocide and mass violence*, Boston, Beacon Press, 1998.

Moreau, Philippe, *Arrepentimiento y reconciliación*, Barcelona, Edicions Bellaterra, 1999.

Nino, Carlos Santiago, *Radical evil on trial*, New Haven, Yale University Press, 1996.

Orozco, Iván, "La pos[t]guerra colombiana: Divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación", en *Análisis político*, No. 46, Bogotá, agosto de 2002.

Osiel, Mark, *Mass atrocity, collective memory, and the law*, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000.

Rotberg, Robert & Dennis Thompson, edit., *Truth versus justice: The morality of truth commissions*, Princeton, Princeton University Press, 2000.

Sánchez, Gonzalo, *Guerras, Memoria e Historia*, Bogotá, IEPRI, 2003.

Scharf, Michael, "The case for a permanent International Truth Commission", in *Duke Journal of Comparative and International Law*, Vol. 7, No. 2, 1999.

Sebald, W. G., *Sobre la historia natural de la destrucción*, Barcelona, Editorial Anagrama, 2003.

Shklar, Judith N., *The faces of injustice*, New Haven, Yale University Press, 1990.

Shriver, Donald W., *An ethic for enemies: Forgiveness in politics*, Princeton, Princeton University Press, 1995.

Springer, Natalia, *Sobre la verdad en los tiempos del miedo: Del establecimiento de una Comisión de la Verdad en Colombia y los desafíos de la justicia restaurativa*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002.

Teitel, Ruti, *Transitional justice*, New York, Oxford University Press, 2000.

Todorov, Tzvetan, *Los abusos de la memoria*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2000.

Valencia Villa, Hernando, *Diccionario de derechos humanos*, Madrid, Espasa Calpe, 2003.

Vidal-Naquet, Pierre, *Los asesinos de la memoria*, México, Siglo XXI Editores, 1994.

* Docente-investigador de la Universidad La Gran Colombia. Economista, magister en Ciencia Política, doctorante en Sociología Jurídica. Investigador del conflicto armado colombiano y el papel del paramilitarismo.
e-mail: rolftor48@hotmail.com

[1] Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987.